



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,  
Revolucionario y Defensor del Mayab"



CONTRALORÍA INTERNA

Oficio No. CI/LXVI/534/2024

Ciudad de México a 08 de noviembre de 2024

Rafael Díaz Ríos  
Coordinador General de la Unidad de Transparencia  
P r e s e n t e.

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, asimismo, en relación con la solicitud de información registrada con el número de folio 330030324001088, recibida por esta Contraloría Interna, el 4 de octubre del presente año, que fuera remitida mediante oficio número UETAIP/LXVI/0166/2024 de fecha 2 de octubre del presente, en la cual se solicita, lo siguiente:

*"Conocer copias de las denuncias o solicitudes de información que tenga el oic donde hacen mención a las comidas que realizaban y llegaban borrachos Esequiel ..., su pareja Berenice ... con personal de Recursos Materiales y proveedores de la cámara de senadores para apoyar y beneficiarlos en las licitaciones.*

*También las Declaraciones patrimoniales del C Galicia y la C Martinez donde adquirieron su carro Volkswagen rojo y la Chevrolet trax azul que le transfirió el anterior contralor Andres ... .*

*Siempre se manejaron de forma poca ética - queremos copia de las denuncias de acoso sexual en donde intervienen sus compañeros del oic. Y ellos los incubrian cobrando u obteniendo beneficios. Finalmente queremos las incidencias del último año donde no registraban el regreso de la comida el c Galicia, la Miriam ... ..., Alejandra ... y rosa ... por estar borrachos. Pueden ver los videos que tiene resguardos de sus choques o caídas por su estado etílico*

*Otros datos para su localización: Pregunten a sus compañeros*

*Vean videos*

*Pregunten en otras áreas*

*Vean solicitudes de transparencia" (Sic)*



Respecto a lo que requiere el solicitante en su primer y tercer párrafo, en este último respecto a "...las incidencias del último año donde no registraban el regreso de la comida el c Galicia, la Miriam ... ..., Alejandra ... y rosa ...", hacemos de su conocimiento que después de realizar una búsqueda amplia y exhaustiva en los archivos de esta Contraloría Interna, no se encontró ninguna documental que pudiera contener la información de su interés; razón por la cual es de aplicarse el Criterio de Interpretación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 07/17 del INAI relativo a casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información.

El cual hace mención que La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.

Con el propósito de ubicar y sustentar la respuesta que se proporcionará al solicitante, a continuación, se precisan las siguientes consideraciones normativas:

En términos de lo previsto en los artículos 6º, Apartado A, fracciones I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 3 y 123 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; asimismo, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en las leyes.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113, numeral 1, los incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores tiene como atribuciones recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen con motivo del presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, así como, iniciar y desahogar los procedimientos administrativos derivados de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



Lo anterior de forma concordante con el artículo 66, numeral 1, inciso j); artículo 67 y artículo 69 numeral 1, inciso e) del Estatuto de los servicios parlamentarios, administrativos y técnicos del Senado de la República.

Cabe señalar que también es de aplicarse lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), cuando se trate de los procedimientos administrativos iniciados hasta el 18 de julio de 2017, conforme al cuarto párrafo del Transitorio Tercero del "DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", publicado en el DOF el 18 de julio de 2016.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, primer párrafo, de la LFRASP, las investigaciones se llevarán a cabo debidamente motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, derivadas exclusivamente, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la LFRASP, para lo cual esta Contraloría Interna tiene la función para requerir información y documentación conducente a esclarecer los hechos o conductas planteados en las quejas y denuncias, que le permitan advertir si existen o no elementos que permitan presumir una responsabilidad administrativa.

Ahora bien, si concluida una investigación se determina el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, el mismo se tramitaba conforme a lo previsto en el artículo 21 de la LFRASP, el cual se inicia mediante la citación del presunto responsable a una audiencia, y concluye con una resolución en la que se determina sobre la inexistencia de responsabilidad o, en su caso, se imponía al infractor, según corresponda, las sanciones administrativas correspondientes previstas en el artículo 13 de la referida Ley.

Asimismo, conforme al séptimo párrafo del Decreto arriba referido, a partir del 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la cual otorga a las Autoridades Investigadora, Substanciadora y resolutora de los Órganos Internos de Control, conforme a su competencia, atribuciones para conocer de la investigación de faltas administrativas y, del procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y hasta su resolución, respectivamente.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 94, primer párrafo de la LGRA, las Autoridades investigadoras llevarán las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, cuando incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones establecidas en el artículo 49 de la LGRA.





Así como por la comisión de las Faltas Administrativas establecidas en los Capítulos II, III y IV del Título Tercero de dicha Ley denominado: "DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES", para lo cual esta Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, tendrá acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y podrá requerir información y documentación conducente a esclarecer los hechos o conductas planteados en las quejas y denuncias, que le permitan advertir si existen o no elementos que permitan presumir una responsabilidad administrativa.

Ahora bien, si concluida una investigación se determina el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, el mismo dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que remita la autoridad investigadora, el cual se tramita conforme a lo previsto en el artículo 208 de la LGRA.

Y concluye con una resolución en la que se determina sobre la inexistencia de responsabilidad o, en su caso, se impone al infractor según corresponda, las sanciones administrativas correspondientes previstas en el artículo 75 de la referida Ley, conforme a su competencia.

Bajo esas consideraciones normativas, respecto a lo que requiere el solicitante en su tercer párrafo, en específico sobre: "... copia de las denuncias de acoso sexual en donde intervienen sus compañeros del oic.... (Sic)" se sometió a consideración del Comité de Transparencia del Senado de la República para que confirmara la clasificación de la información confidencial, relativa a la existencia o no de lo solicitado, con fundamento en los artículos 44, fracción II, 106, fracción I, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 65, fracción II, 98, fracción I, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la regla TERCERA de las Reglas de operación del Comité de Transparencia del Senado de la República, que establecen que se considera información confidencial, entre otra, la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o identificable, y que para permitir el acceso se requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información; conforme a lo señalado en el oficio CI/LXVI/239/2024. Dicho órgano colegiado, mediante resolución 330030324001088 de la décima segunda sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2024 (Anexo 1), confirmó la clasificación de la información confidencial y la elaboración de este documento para informar respecto de lo solicitado.

Finalmente le informamos que sus requerimientos *se atendieron conforme al criterio del INAI 2/17 referente a la congruencia y exhaustividad*, que menciona los alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.



De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; ya que este acto administrativo cumple con los principios de congruencia y exhaustividad.

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados.

Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.

Asimismo,

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente



Licenciado Gerardo Fragozo Díaz  
El Contralor Interno

c.c.p. Subcontraloría de Responsabilidades, Quejas y Denuncias.- Para los efectos a que haya lugar.  
Unidad de Anticorrupción y Transparencia.- Para su conocimiento.





*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".*



**CONTRALORÍA INTERNA**  
**Dirección de Situación Patrimonial y**  
**Control Normativo**  
**Oficio No. CI/LXVI/DSP/239/2024**

**Ciudad de México, a 24 de octubre de 2024**

**Lic. Rafael Diaz Ríos**  
**Coordinador General de la Unidad de Transparencia**  
**de la Cámara de Senadores**  
**P r e s e n t e**

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, asimismo, en relación con la solicitud de información recibida el 30 de septiembre del presente año, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el número de folio 330030324001088, que fuera remitida mediante oficio número UETAIP/LXVI/0166/2024 de fecha 02 de octubre del 2024, signado por la Lic. Yessica Anahí Torres Carcaño, Jefa de Unidad de Transparencia, recibido en la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores en esa misma fecha, mediante la cual se solicita, entre otras cuestiones, lo siguiente:

*(...) También las Declaraciones patrimoniales del C. Galicia y la C. Martínez donde adquirieron su carro Volkswagen rojo y la Chevrolet trax azul que le transfirió el anterior c... Andres .... (...)"*

Por lo que en ejercicio de las funciones y atribuciones conferidas a esta Contraloría Interna, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112 y 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 23 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LGTAIP); 1, 6, 12 y 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LFTAIP); me permito dar contestación, en los términos siguientes:

**ÚNICO.-** Por lo que hace a la solicitud de información, en primer lugar se aclara que esta Dirección de Situación Patrimonial y Control Normativo únicamente se pronunciará respecto a la solicitud de las declaraciones patrimoniales de las personas que son o fueron servidores públicos del Senado, identificados por el solicitante como C. Galicia y C. Martínez.

Página 1 de 5.



*"2024, Año del Bicentenario  
de la instauración del Senado de la República y del  
Sesquicentenario de su restauración en México"*





En este sentido, es menester señalar que los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos *ad hoc* para atender las solicitudes de información; por lo que se podrá dar acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses requeridas en el formato en que se presentan, sin que nos podamos pronunciar sobre los juicios o valoraciones personales del solicitante.

Ahora bien, toda vez que el peticionario no señala qué declaración solicita o cual es el periodo respecto del cual solicita la información, por lo que, de conformidad con el **criterio “03-19 Periodo de búsqueda de la Información”** del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que indica que en el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que **el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud**; por lo que se informa que a la fecha de recepción de la solicitud de información, y durante el año anterior **esta autoridad localizó las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que a continuación se indicarán de las personas sobre las que recae la solicitud de información.**

Al respecto se precisa que el criterio “03-19 Periodo de búsqueda de la Información” del INAI, dice a la letra lo siguiente:

*“Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.*



### Resoluciones

- **RRA 0022/17.** Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 16 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.  
○ <http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=.%2Fpdf%2Fresoluciones%2F2017%2F&a=RRA%2022.pdf>
  - **RRA 2536/17.** Secretaría de Gobernación. 07 de junio de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.  
○ <http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=.%2Fpdf%2Fresoluciones%2F2017%2F&a=RRA%202536.pdf>
  - **RRA 3482/17.** Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 02 de agosto de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  
○ <http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=.%2Fpdf%2Fresoluciones%2F2017%2F&a=RRA%203482.pdf>
- Segunda Época. Criterio 03/19”

En este sentido se informa, por lo que hace a **las declaraciones de situación patrimonial y de intereses requeridas**, que la documentación solicitada se encuentra disponible en versión pública al contener información confidencial, cuya clasificación fue confirmada mediante la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, emitida en su Quinta Sesión Ordinaria, de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, visible en la dirección electrónica:

**[https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRAC-XXXIX/RCTSR005\\_0130000019120.pdf](https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRAC-XXXIX/RCTSR005_0130000019120.pdf)**

Expuesto lo anterior, la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, con base en el Derecho Humano de Acceso a la Información, en aplicación de los principios *Pro Homine* y el de *Máxima Publicidad*, hace del conocimiento del peticionario que la documentación requerida ha sido localizada en los archivos que resguarda esta Contraloría Interna, y **que se permitirá el acceso a la información en versión pública de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses solicitadas.**

Ahora bien, a partir **del 1 de enero de 2020, son operables en el ámbito federal los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses** publicados en el Diario Oficial de la





*“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”.*

Federación el 23 de septiembre de 2019; asimismo, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece, entre otras cuestiones, que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución; y con fundamento en el artículo 70, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás normativa aplicable, se le hace saber al solicitante que **las versiones públicas de las declaraciones de todos los Senadores y servidores públicos del Senado, que se presentan en el nuevo formato vigente a partir del 01 de enero de 2020, se han publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o en el repositorio del Senado, conforme a las normas y tiempos de publicación que establece la Ley**; y que las versiones públicas de las declaraciones requeridas y citadas se encuentran visibles en las direcciones electrónicas siguientes:

**[https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRAC-XII/DP\\_Num21207\\_Declaracion\\_Publico.pdf](https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRAC-XII/DP_Num21207_Declaracion_Publico.pdf)**

**[https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRAC-XII/DP\\_Num21548\\_Declaracion\\_Publico.pdf](https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRAC-XII/DP_Num21548_Declaracion_Publico.pdf)**

Finalmente, **por lo que hace al resto de la información solicitada que no es materia de declaraciones patrimoniales y de intereses**, es de precisar que de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el Reglamento del Senado de la República; el Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República; y demás normatividad vigente y aplicable a esta Dirección de Situación Patrimonial y Control Normativo de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, y las facultades, competencias y funciones que ejerce derivadas de las mismas, **no genera ni posee la información relativa ya que no es materia de sus atribuciones legales, siendo probable que otras áreas o entes, pudieran ser competentes para atender el resto de la solicitud de información que nos atañe; por lo que esta Dirección se encuentra materialmente impedida para proporcionar dicha información**, lo anterior con fundamento en los artículos 19, 20, y 129 de la LGTAIP, así como los artículos 12, 13 y 130 párrafos primero y cuarto de la LFTAIP.

Página 4 de 5.



*“2024, Año del Bicentenario  
de la instauración del Senado de la República y del  
Sesquicentenario de su restauración en México”*







*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".*

Siendo aplicable a la especie el criterio 07/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala:

*"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información."*

Le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

**Atentamente**

**Lic. Guadalupe Socorro Flores Salazar**  
**Directora de Situación Patrimonial y Control Normativo**

c.c.p. Lic. Gerardo Fragozo Díaz.- Contralor Interno de la Cámara de Senadores. Para su conocimiento.

C.c.p. Mtro. Jesús Monreal García.- Jefe de Unidad de Anticorrupción y Transparencia. Para su conocimiento y efectos.

GSFS/CMG

Página 5 de 5.



*"2024, Año del Bicentenario  
de la instauración del Senado de la República y del  
Sesquicentenario de su restauración en México"*



## ANTECEDENTES

**1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN.** - El 2 de octubre de 2024, la Unidad de Transparencia del Senado de la República recibió una solicitud de información, misma que se registró en la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio **3300303234001088** en la que la persona solicitante requirió:

*"Conocer copias de las denuncias o solicitudes de información que tenga el oic donde hacen mención a las comidas que realizaban y llegaban borrachos (...) con personal de Recursos Materiales y proveedores de la cámara de senadores para apoyar y beneficiarlos en las licitaciones.*

*También las Declaraciones patrimoniales del (...) donde adquirieron su carro Volkswagen rojo y la Chevrolet trax azul que le transfirió el anterior contralor Andres Lozano.*

*Siempre se manejaron de forma poca ética - queremos copia de las denuncias de acoso sexual en donde intervienen sus compañeros del oic. Y ellos los incubían cobrando u obteniendo beneficios. Finalmente queremos las incidencias del último año donde no registraban el regreso de la comida el (...) por estar borrachos. Pueden ver los videos que tiene resguardos de sus choques, o caídas por su estado etílico*

*Otros datos para su localización: Pregunten a sus compañeros  
Vean videos  
Pregunten en otras áreas  
Vean solicitudes de transparencia" (Sic)*

**2. TURNO DE LA SOLICITUD.** - El 2 de octubre de 2024, la Unidad de Transparencia del Senado de la República turnó la solicitud de mérito a la Contraloría Interna.

**3. AMPLIACIÓN DE PLAZO.** - El 28 de octubre de 2024, en su vigésima sesión extraordinaria el Comité de Transparencia aprobó una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud, en miras del análisis que requiere su respuesta.

**4. RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA INTERNA.** - El 30 de octubre de 2024, se recibió oficio CI/LXVI/509/2024 dirigido al Secretario Técnico del Comité de Transparencia del Senado de la República, en el que la Contraloría manifestó, lo siguiente:

*"En términos de lo previsto en los artículos 6º, Apartado A, fracciones 1 y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 3 y 123 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), el derecho humano de acceso a la información comprende **solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; asimismo, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en las leyes.***

*Conforme a lo dispuesto en el artículo 113, numeral 1, los incisos e) y f) de la **Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos**, la Contraloría Interna de la Cámara de*



ASUNTO: Análisis de la solicitud  
330030324001088

Senadores tiene como atribuciones **recibir y dar trámite a las quejas y denuncias** que se formulen con motivo del presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, así como, **iniciar y desahogar los procedimientos administrativos** derivados de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo anterior de forma concordante con el artículo 66, numeral 1, inciso j); artículo 67 y artículo 69 numeral 1, inciso e) del **Estatuto de los servicios parlamentarios, administrativos y técnicos del Senado de la Republica**.

Cabe señalar que también es de aplicarse lo dispuesto en la **Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP)**, cuando se trate de los procedimientos administrativos iniciados **hasta el 18 de julio de 2017**, conforme **al cuarto párrafo del Transitorio Tercero** del "DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", publicado en el DOF el 18 de julio de 2016, que establece:

"Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia.

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas."

COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

ASUNTO: Análisis de la solicitud  
330030324001088

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, primer párrafo, de la LFRASP, las investigaciones se llevarán a cabo debidamente motivadas **respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, derivadas exclusivamente, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la LFRASP**, para lo cual esta Contraloría Interna tiene la función para requerir información y documentación conducente a esclarecer los hechos o conductas planteados en las quejas y denuncias, que le permitan advertir si existen o no elementos que permitan presumir una responsabilidad administrativa.

Ahora bien, si concluida una investigación se determina el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, el mismo se tramitaba conforme a lo previsto en el artículo 21 de la LFRASP, el cual se inicia mediante la citación del presunto responsable a una audiencia, y concluye con una resolución en la que se determina sobre la inexistencia de responsabilidad o, en su caso, se imponía al infractor, según corresponda, las sanciones administrativas correspondientes previstas en el artículo 13 de la referida Ley.

Asimismo, conforme al **séptimo párrafo** del Decreto arriba referido, a partir del **19 de julio de 2017**, entró en vigor la **Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)**, la cual otorga a las Autoridades Investigadora, Substanciadora y resolutora de los Órganos Internos de Control, conforme a su competencia, atribuciones para conocer de la investigación de **faltas administrativas y, del procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y hasta su resolución, respectivamente.**

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 94, primer párrafo de la LGRA, las Autoridades investigadoras llevarán las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, cuando incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones establecidas en el artículo 49 de la LGRA, así como por la comisión de las Faltas Administrativas establecidas en los Capítulos II, III y IV del Título Tercero de dicha Ley denominado: "DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES", para lo cual esta Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, tendrá acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y podrá requerir información y documentación conducente a esclarecer los hechos o conductas planteados en las quejas y denuncias, que le permitan advertir si existen o no elementos que permitan presumir una responsabilidad administrativa.

Ahora bien, si concluida una investigación se determina el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, el mismo dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que remita la autoridad investigadora, el cual se tramita conforme a lo previsto en el artículo 208 de la LGRA, y concluye con una resolución en la que se determina sobre la inexistencia de responsabilidad o, en su caso, se impone al infractor según corresponda, las sanciones administrativas correspondientes previstas en el artículo 75 de la referida Ley, conforme a su competencia.

Bajo esas consideraciones normativas, respecto a lo que requiere el solicitante: "... **queremos copia de las denuncias de acoso sexual en donde intervienen sus compañeros del oic. Y ellos los incubían cobrando u obteniendo beneficios ... (Sic)** fundamento en los artículos 44, fracción II, 106, fracción I, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 65, fracción II, 98, fracción I, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la regla TERCERA de las Reglas de operación del Comité





COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

ASUNTO: Análisis de la solicitud  
330030324001088

de Transparencia del Senado de la República, respetuosamente someto a consideración del Comité de Transparencia, confirmar la clasificación de la información confidencial, relativa a la existencia o no de lo solicitado, conforme a lo siguiente:

Los artículos 113, fracción I, y último párrafo, y 117, primer párrafo de la LFTAIP, disponen lo siguiente:

"Artículo 113. Se considera información confidencial:

I.La que contiene **datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

(...)

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial **requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.**

(...)"

Así mismo, los artículos 116, primer párrafo, y 120, primer párrafo de la LGTAIP, disponen lo siguiente:

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren **obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.** (...)"

Es decir, que se considera información confidencial, entre otra, la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o identificable, y que para permitir el acceso se requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

Señalado lo anterior, resulta pertinente aclarar que la protección a la confidencialidad de los datos personales establecida en las Leyes en la materia es una garantía de cualquier persona independientemente del carácter de su profesión. En este sentido, **los servidores públicos, aún en el ejercicio de su encargo, cuentan con la protección de sus datos personales confidenciales.**

En este contexto, si bien el nombre de los servidores públicos, en principio, constituye información de naturaleza pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, fracciones II y VII de la LGTAIP; existen excepciones a esta regla general, cuando la información actualiza alguna de las causales de reserva o confidencialidad prevista en los artículos 110 y 113 de la LFTAIP, y 116 y 120 de la LGTAIP.

Ahora bien, en términos de lo previsto en los artículos 103 y 104 de la LGTAIP, y 102 de la LFTAIP, en los cuales se dispone que en los casos en los cuales se niegue el acceso a la información, por actualizarse algunos de los supuestos de clasificación, se deberá aplicar una **prueba de daño**, por lo que al respecto se señala lo siguiente:

En términos de lo previsto en los artículos 6º, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 116 y 122 de la LGTAIP, 3, 113 y 123 de la LFTAIP, **el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información**; asimismo, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en las leyes. Sin embargo, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a la información reservada y a la información confidencial.

Por otro lado, de conformidad con los artículos 7 de la LGTAIP, y 6 de la LFTAIP, el derecho de acceso a la información o la clasificación de la información, deben ser interpretados conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

En ese contexto, de conformidad con el artículo 20, inciso B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se emita sentencia que demuestre su responsabilidad. En ese sentido, dar a conocer si existe o no alguna queja o procedimiento administrativo, en contra de un servidor público al que refiere el solicitante, podría afectar el derecho a la presunción de inocencia de ese servidor público, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad, afectando su prestigio y su buen nombre**, por ende, no es dable dar a conocer la existencia o no de lo solicitado.

Respecto al derecho fundamental al honor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pronunciado la siguiente tesis jurisprudencial:

"Registro: 2005523; Época: Décima Época; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, febrero de 2014, Tomo I; Materia (S): Constitucional; Tesis: 1a./J.118/2013 (10a.); Página: 470.

**DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.** A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros."

Como se observa, el honor es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.

En el campo jurídico, es un derecho humano que involucra la facultad de cada individuo de ser tratado de forma decorosa. Este derecho se compone, por una parte, de un elemento subjetivo, que se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace



de su propia dignidad y, adicional a éste, un elemento objetivo, que es la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad.

*De tal forma, en el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad; y en el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta la reputación que la persona merece.*

*Por lo tanto, es posible concluir que al dar a conocer que ha determinado servidor público se le han imputado ciertos hechos, se afectaría su vida privada, pues se podría generar de él una percepción negativa sin que la autoridad competente haya resuelto en definitiva respecto de su inocencia o culpabilidad, haya existido un desistimiento o simplemente no se hubieran encontrado elementos para acreditar la conducta.*

*En ese sentido, vincular el nombre de un servidor público sujeto a hechos posiblemente irregulares, respecto de las cuales no se ha acreditado su responsabilidad o simplemente se desistieron, vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia, ya que podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia.*

*Bajo ese entendido, se desprende que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los sujetos obligados deben velar, de igual forma, por el respeto a la vida privada y honor de un individuo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP.*

*Por su parte, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se prevé:*

*"Artículo 12. Nadie será objeto de inferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales inferencias o ataques."*

*Asimismo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece lo siguiente:*

*"Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.*

*1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*

*2. Nadie puede ser objeto de inferencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*

*3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas inferencias*

*Finalmente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala:*

*Artículo 17*

*1. Nadie será objeto de inferencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*

*2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas inferencias o esos ataques."*

COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

ASUNTO: Análisis de la solicitud  
330030324001088

De forma reiterada y conforme a las consideraciones vertidas, se tiene que la divulgación de información confidencial representa un riesgo real a la vida privada y a la protección de los datos personales, ya que de darse a conocer que ha determinado servidor público se le han imputado ciertos hechos, se afectaría su vida privada, pues se podría generar de él una percepción negativa sin que la autoridad competente haya resuelto en definitiva respecto de su inocencia o culpabilidad.

Ahora bien, **de acuerdo con el principio de proporcionalidad**, tenemos que la restricción (confidencialidad) al derecho de acceso a la información, tiene como fin legítimo la protección de la vida privada y los datos personales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como el derecho a la vida privada, constituye fin legítimo, el cual está consagrado en el marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre tales derechos, se considera que en el caso concreto **debe prevalecer la protección a la vida privada, ya que el vincular el nombre de un servidor público sujeto a hechos posiblemente irregulares, respecto de las cuales no se ha acreditado su responsabilidad, vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia**, ya que podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado.

De acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye que **la afectación que podría traer la divulgación de la información en comento es mayor que el interés público de que se difunda**, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales.

**De esta manera, se considera que pronunciarse sobre la existencia o no de la información solicitada, podría incidir en el honor del entonces servidor público objeto de la solicitud que nos ocupa**, y, en ese sentido, en el ejercicio de su profesión. Incluso, aun cuando dicha persona tenga el carácter de servidor público, ya que esa condición no la exime de la protección de sus datos personales y se estaría dando a conocer información confidencial, lo que iría en sentido contrario de la posición garantista de proteger los datos personales, toda vez que se podría causar un daño al mismo, con relación a su esfera laboral y privada, ya que de hacerse pública la información solicitada podría generar una percepción negativa de ese ex servidor público afectando su intimidad y reputación, y terceras personas podrían presuponer los hechos y manifestaciones como ciertas, sin que éstas hayan sido determinadas por autoridad competente, afectando su prestigio y buen nombre.

Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 44, fracción II, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 65, fracción II, 98, fracción I, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la regla TERCERA de las Reglas de operación del Comité de Transparencia del Senado de la República, **respetuosamente someto a consideración del Comité de Transparencia, confirmar la clasificación de la información confidencial, relativa a la existencia o no de lo solicitado.**" (Sic)

Siendo todos los antecedentes para considerar, este órgano colegiado estima pertinente esgrimir las siguientes consideraciones normativas respecto de la solicitud de información analizada.



## CONSIDERANDOS

### I. COMPETENCIA.

El Comité de Transparencia es competente en términos de los artículos 43, 44, fracción II y 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción II y 98 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el numeral sexto del *"Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se integra el Comité de Transparencia del Senado de la República"*; y la Regla Décima, fracciones I, II, III y IV de las *"Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Senado de la República"*, para confirmar, modificar o revocar la clasificación de confidencialidad que realicen los titulares de las unidades que integran la Cámara de Senadores.

### II. MATERIA.

El objeto de la presente resolución será analizar la clasificación de confidencialidad que propone la Contraloría Interna respecto de la existencia o no de las expresiones documentales solicitadas. Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 primer párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas* (Lineamientos Generales).

### III. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO.

Desde este punto este Comité advierte que la respuesta de la Contraloría Interna versa respecto del siguiente contenido de la solicitud de información citada en el numeral 1:

*"Conocer copias de las denuncias o solicitudes de información que tenga el oic donde hacen mención a las comidas que realizaban y llegaban borrachos (...) con personal de Recursos Materiales y proveedores de la cámara de senadores para apoyar y beneficiarlos en las licitaciones.*

*...  
Siempre se manejaron de forma poca ética - queremos copia de las denuncias de acoso sexual en donde intervienen sus compañeros del oic. Y ellos los incubrían cobrando u obteniendo beneficios..."*

En ese tenor menester comenzar este apartado mencionado que este Senado de la República, como todas las autoridades del Estado Mexicano, en cumplimiento a los artículos 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), se encuentra obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

En el caso particular de la transparencia y el acceso a la información, es un derecho humano declarado en el artículo 6º apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que en ocasiones se encuentra limitado por otro derecho constitucionalmente reconocido, siendo este el de protección de datos personales, emanado del 16º artículo de la referida carta magna.



## COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

ASUNTO: Análisis de la solicitud  
330030324001088

Con base en lo anterior, desde este punto el colegiado determina pertinente mencionar que en todo caso abierto en la Contraloría Interna para determinar si es pertinente o no el fijar alguna sanción en cualquiera de sus denominaciones, resulta necesario tomar en cuenta el principio de inocencia de la persona o personas involucradas en cada expediente.

Esto pues, dentro de las atribuciones de esa autoridad estará el fijar si en efecto obró alguna conducta objeto de sanción en caso de que así se considere, esto de manera fundada y motivada, de conformidad con el marco constitucional, convencional y legal aplicable.

Es decir, toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine la culpabilidad de una persona física a través de una resolución que demuestre que existió una falta, divulgar el nombre de una persona sujeta a un proceso se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

En tales consideraciones, este Senado de la República se encuentra imposibilitado jurídicamente para pronunciarse al respecto; toda vez que esta posee información que se ubica en el ámbito de lo privado, encontrando para tal efecto la protección bajo la figura de la confidencialidad en términos del artículo 116 de la Ley General de la materia y 113 de la Federal; ya que afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna expresión documental como la requerida en donde pudiera estar una persona física identificada o identificable en cualquier calidad de que esta tenga dentro de una investigación, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de las personas posiblemente involucradas.

De esta forma, a continuación **se realizará un estudio de fondo respecto de la imposibilidad** por parte de este sujeto obligado para señalar la existencia o no de la información requerida y del por qué se actualiza la causal de confidencialidad prevista en los artículos 116 primer párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales, los cuales disponen lo siguiente:

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**"Artículo 116.** Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

[...]

**Artículo 120.** Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información."

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**"Artículo 113.** Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;



[...]

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."*

**"Artículo 117.** *Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. (...)"*

- Lineamientos Generales

**"Trigésimo octavo.** *Se considera información confidencial:*

*I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*

[...]

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello."*

De lo expuesto, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de algún procedimiento relacionado con la solicitud de información afectaría directamente a las personas relacionadas, concretamente a su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una resolución.

Al efecto, se debe considerar que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme los artículos 1º, 6º y 16º de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y a la protección de sus datos personales y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, estableciendo lo siguiente:

**"Artículo 6o.** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

[...]

**II.** *La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

[...]

**Artículo 16.** *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

*Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”*

Es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que **el derecho de acceso a la información tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afecta el *honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas*; además de definir la *afectación a la moral*, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

**“DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.** El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. **Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.**<sup>1</sup>

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como

<sup>1</sup> Tesis Jurisprudencial, I,3o.C. J/71 (9a.), Libro IV, Tomo 5, Pág. 4036, enero de 2012, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito.



uno de los derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con ello contraría otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que **en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.** Asimismo, ese derecho del individuo, con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de comunicación refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política.

Ello permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. Luego, **en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión tiene límites**

de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.<sup>2</sup>

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.**

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.<sup>3</sup>

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

"Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala:

"Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece

"Artículo 17.

<sup>2</sup> Tesis Aislada, I,3o.C.244 C, Tomo: XIV, septiembre de 2001, Novena Época, Tercer Tribunal Colegiado Circuito.

<sup>3</sup> Tesis Aislada, P. LX/2000, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Pleno.



1. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.**
2. **Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."**

No se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia** es una garantía de cualquier persona imputada, prevista en el artículo 20 de la Constitución, que a la letra dispone:

*"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

...  
**B. De los derechos de toda persona imputada:**

**A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa"**

En ese tenor, en el caso que nos ocupa, **se actualiza la limitante del derecho a la información, constreñida en la confidencialidad y secrecía que le asiste a toda persona**, como en el caso lo es, de quien solicitan la información, ello con fundamento en los artículos 116 primer párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales, citados anteriormente.

Esto pues al dar a conocer; que ha determinado servidor público se le han imputado ciertos hechos, se afectaría su vida privada, pues se podría generar de él una percepción negativa sin que la autoridad competente haya resuelto en definitiva respecto de su inocencia o culpabilidad, haya existido un desistimiento o simplemente no se hubieran encontrado elementos para acreditar la conducta.

En ese sentido, como ha quedado establecido, vincular el nombre de un servidor público sujeto a hechos posiblemente irregulares, respecto de las cuales no se ha acreditado su responsabilidad o simplemente se desistieron, vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia, ya que podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia.

Bajo ese entendido, se desprende que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los sujetos obligados deben velar, de igual forma, por el respeto a la vida privada y honor de un individuo, de conformidad con los artículos invocados.

Por tanto, se concluye que, de acuerdo con el **principio de proporcionalidad**, tenemos que la restricción (confidencialidad) al derecho de acceso a la información, tiene como fin, legítimo la protección de la vida privada y los datos personales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como el derecho a la vida privada, constituye fin legítimo, el cual está consagrado en el marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre tales derechos, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección a la vida privada, ya que el vincular el nombre de los servidores públicos sujeto a hechos posiblemente

irregulares, respecto de las cuales no se ha acreditado su responsabilidad, vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia.

De acuerdo con el mencionado principio de proporcionalidad, se concluye que la afectación que podría traer la divulgación de la información en comento es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales.

**De esta manera, se considera que pronunciarse sobre la existencia o no de la información solicitada, podría incidir en el honor de quien es referido en la solicitud nos ocupa,** y, en ese sentido, en el ejercicio de su profesión. Incluso, aun cuando la persona tenga el carácter de servidor público, ya que esa condición no la exime de la protección de sus datos personales y se estaría dando a conocer información confidencial, lo que iría en sentido contrario de la posición garantista de proteger los datos personales, toda vez que se podría causar un daño al mismo, con relación a su esfera laboral y privada, ya que de hacerse pública la información solicitada podría generar una percepción negativa de ese servidor público afectando su intimidad y reputación, y terceras personas podrían presuponer los hechos y manifestaciones como ciertas, sin que éstas hayan sido determinadas por autoridad competente, afectando su prestigio y buen nombre.

De lo anterior se desprende que las Leyes de la materia, contemplan que se debe considerar información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable y a la que sólo tendrá acceso su titular; asimismo, cabe señalar que la clasificación de confidencialidad no estará sujeta a temporalidad alguna.

Por consiguiente, se reitera que, se actualiza la limitante del derecho a la información, constreñida en la confidencialidad y secrecía que le asiste a toda persona, como en el caso lo es, de quien solicitan la información, ello con fundamento en los artículos 116 primer párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales.

En esa consideración, se aprueba la elaboración del documento respectivo, en la que se omite el pronunciamiento sobre los datos enunciados como confidenciales.

### RESOLUCIÓN

**PRIMERO.** Se confirma la **clasificación de confidencialidad** respecto de la existencia o no de lo requerido que propuso la Contraloría Interna, ello conforme al pronunciamiento de fondo de la presente resolución. Lo anterior con fundamento en los artículos 116 primer párrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.





**COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA**

**ASUNTO: Análisis de la solicitud  
330030324001088**

**SEGUNDO.** Se aprueba la elaboración del documento respectivo, en el que la Contraloría Interna clasifique como confidencial el pronunciamiento institucional sobre si existe o no la expresión documental requerida.

**NOTIFÍQUESE.** A la Contraloría Interna copia de la presente resolución, vía correo electrónico, de conformidad con la fracción V de la regla Décima de las "Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Senado de la República".

La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes titulares asistentes, o de sus respectivos suplentes, del Comité de Transparencia, en la décima segunda sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2024.

**ERIK DANIEL ÁLVAREZ DE LA CRUZ  
INTEGRANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA  
GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**YESSICA ANAHÍ TORRES CARCAÑO  
INTEGRANTE SUPLENTE DE LA  
COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA**

**JESÚS MONREAL GARCÍA  
INTEGRANTE SUPLENTE DEL TITULAR DE LA  
CONTRALORÍA INTERNA**

**ELISEO DÍAZ ORTIZ  
INTEGRANTE, TITULAR DE TRANSPARENCIA  
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS  
PARLAMENTARIOS**

**JOSÉ SANVICENTE MARTÍNEZ  
INTEGRANTE SUPLENTE DE LA COORDINACIÓN  
DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**FELIPE GARCÍA LÓPEZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE  
TRANSPARENCIA**